

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARTHA RESTREPO GIL, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP- (Radicado 05001-31-05-023-2018-00256-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previas unas declaraciones, se condene a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes que dice tener derecho por la muerte de su cónyuge el señor Saúl Mejía Tobón, a partir del 1° de enero de 2017, intereses moratorios o a la indexación, y costas del proceso (fl. 4).

Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, señala lo siguiente: el señor Saúl Mejía Tobón en vida disfrutaba de una pensión de invalidez permanente parcial, reconocida mediante Resolución 0452 del 31 de mayo de 1967, efectiva a partir del 2 de noviembre de 1966; este murió el 1° de enero de 2017; contrajo matrimonio católico con el señor Mejía Tobón el 21 de mayo de 1968, asentado en el registro civil con indicativo serial 06882098 del 7 de abril de 2017; fruto de dicha unión se procrearon cuatro hijos: Marcela, Saúl, José Alfredo y Martha Catalina; la convivencia con su cónyuge perduró por espacio de 49 años, de forma continua y bajo el mismo techo, sin interrupción alguna hasta el momento de su

muerte, es decir, hasta el 1° de enero de 2017; entre la pareja se constituyó una comunidad de vida, cimentada sobre la real convivencia en pareja, basada en la existencia de lazos afectivos y el ánimo de brindarse ayuda, asistencia, apoyo y colaboración mutua, siendo ella quien cuidó y acompañó a su cónyuge hasta el día de su fallecimiento; solicitó ante la entidad demandada el 6 de junio de 2017 el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la misma que le fue negada mediante Resolución RDP 036386 del 21 de septiembre de 2017, decisión confirmada mediante Resolución RDP 047506 del 20 de diciembre de 2017.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- dio respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos dijo que eran ciertos, limitándose solo a decir que frente a la convivencia y su duración que nada le constaba. Propuso como excepciones las que denominó ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, inexistencia de la obligación y prescripción.

El Juzgado Veintitrés Laboral Del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2020, condenó a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes a la demandante a partir del 1° de enero de 2017, debidamente indexada desde dicha data y hasta el momento de la inclusión en nómina, concediéndole un plazo de 4 meses a la entidad para emitir el respectivo acto administrativo y hacer efectivo el pago de las mesadas correspondientes. Autorizó a la accionada a descontar del valor del retroactivo pensional lo correspondiente para el Sistema General de Salud. Por último, le impuso las costas a la UGPP, fijándole como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Inconforme con la decisión, interpusieron el recurso de apelación quienes representan a las partes. La parte demandante pretende con el recurso el reconocimiento de los intereses moratorios, dada la tardanza en el reconocimiento de la prestación.

Por su lado, la apoderada de la entidad accionada pretende que se revoque la decisión, señalando para ello, con base en la investigación administrativa llevada a cabo por la entidad, que no se logró establecer con certeza el término de convivencia entre la pareja. Refiere que en el caso de que se reconozca la

prestación, se absuelva del pago de la condena en costas, dada la buena fe de la entidad, dado que el actuar de la entidad fue siempre diligente.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Ciertamente al interior del proceso no se discute la muerte del señor Samuel Mejía Tobón el 1° de enero de 2017 (fl. 17), su condición de pensionado por incapacidad permanente parcial y su matrimonio con la señora Martha Restrepo Gil el 21 de mayo de 1968 (fl. 12), de cuya unión nacieron cuatro hijos, todos mayores de edad y sin discapacidades.

La falladora de primer grado para reconocer la pensión solicitada, y luego de advertir que la norma aplicable al caso era el artículo 47 de Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en síntesis, señaló que de los testimonios traídos al proceso, más la declaración extra juicio obrante en el plenario, se puede evidenciar la relación de pareja del pensionado fallecido con la demandante por un lapso superior a los exigidos por la norma.

En este contexto entonces, la Sala debe entrar a estudiar si en verdad la convivencia de MARTHA RESTREPO GIL con SAMUEL MEJÍA TOBÓN alcanzó a durar 5 o más años. La *a quo*, se fundamentó en los testimonios y la declaración extra juicio para dar por probado el cumplimiento de este requisito, conclusión que comparte esta Corporación.

Acreditar un hecho, como bien se sabe en materia probatoria, es llevar certeza al operador jurídico de su existencia. En materia testimonial se ha dicho que no es necesario que tal convencimiento provenga de dos o más testigos, pues estos se pesan y no se cuentan, siendo lo necesario, a la luz de las reglas establecidas en el artículo 61 del C.P. del T. y de la S.S. que el convencimiento se forme con soporte “... en los principios que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las

circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...". Es regla también de oro en materia procesal laboral que para acreditar un hecho existe libertad de medios probatorios, sin que esto dicho signifique que para acreditar unos hechos existan unos más expeditos e idóneos.

Estudiando el distinto material probatorio arrimado al proceso, de frente a la convivencia que debía acreditar la señora MARTHA RESTREPO GIL, determinante para el reconocimiento de la pensión solicitada, la Sala advierte que la prueba recaudada al interior del plenario resulta suficiente para dar certeza que efectivamente se presentó una convivencia entre la pareja MEJÍA RESTREPO por un espacio superior a los 5 años, pues es inobjetable que ellos contrajeron matrimonio católico el 21 de mayo de 1968, y que la relación al menos estuvo vigente durante los últimos 10 años anteriores al fallecimiento del causante, que es el tiempo al que hacen referencia los testigos que conocen a la pareja, pues estos son contestes al señalar que vivían en una casa en el barrio Conquistadores de Medellín, que siempre se les vio unidos, no se llegaron a separar, situación que resultaba de su conocimiento por cuanto el testigo Alirio Escobar Giraldo fue pareja de la nieta de estos de nombre Catalina, que vivía con ellos, visitándola en su casa con una periodicidad de 4 o 5 veces por semana, por lo que se daba cuenta de las condiciones de vida al interior del hogar, y el testigo Cristian Camilo Peña Vásquez igualmente hace referencia a la unión de ellos dada la amistad que sostenía con la misma Catalina, y de la permanencia de dicha relación por un lapso superior a los 5 años.

De igual manera, a folio 31 del expediente, aparece una declaración extra juicio de la señora DORALBA MONROY MARTINEZ, quien dice en el escrito conocer al señor Saúl Mejía Tobón por espacio de 12 años, quien estaba casado con la señora Martha Restrepo Gil, con quien convivía de manera permanente, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el momento de la muerte de este; que el señor Mejía Tobón no dejó hijos por fuera de su matrimonio y que la señora Restrepo Gil dependía económicamente de su esposo; argumentos que van en la misma línea de los testigos traídos al proceso, por lo que igualmente dan cuenta de la relación de pareja Mejía Restrepo por más de 10 años anteriores a la muerte del pensionado, elementos que en su conjunto permiten a esta Sala de Decisión confirmar la decisión frente al reconocimiento de la sustitución pensional.

En cuanto al reparo de la parte actora por los intereses moratorios, es de anotar que no desconoce la Sala la investigación administrativa adelantada por la entidad accionada, de la cual se puede extractar que la demandante al momento de la entrevista con ellos, se mostró renuente a brindarles colaboración frente a una posible entrevista con sus hijos o familiares u otros testigos que dieran fe de la relación de pareja que sostuvo con el pensionado fallecido, pues nótese como en dicha investigación se señaló “...*De acuerdo al desarrollo de la presente investigación, se evidencia en la entrevista realizada a la señora Martha Restrepo Gil (solicitante), que no prestó mayor colaboración en aras de aportar nombres o datos de identificación, ni de los familiares, ni de vecinos o hijos del causante, por tal motivo no se logró efectuar entrevistas a familiares, ni amigos o vecinos del causante que pudieran manifestar el tiempo de convivencia entre los cónyuges*” y, en tal sentido, la entidad atendió la solicitud de la actora bajo las condiciones a que ella misma la sometió, quedando evidenciado que con la sola testigo lograda en la investigación resultaba muy difícil concluir alguna convivencia mayor al año y medio que dijo haberlos conocido, por lo que bajo estos supuestos, se debe confirmar la sentencia frente a la absolución de los intereses de mora.

Analizada la condena por concepto de indexación en el grado de consulta, poco es lo que hay por agregar por cuanto en economías inflacionarias como la nuestra, el solo paso del tiempo genera una pérdida del valor del dinero, el cual se debe compensar mediante el reconocimiento de dicho concepto, tal cual lo dispuso la juez de instancia.

Frente al reparo por las costas procesales, baste decir que el criterio que tiene establecido el artículo 365 del Código General del Proceso es objetivo, es decir, “...*Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...*”, y siendo que a la UGPP resultó vencida, ninguna otra consideración se debe de analizar, como lo sería la buena fe de la entidad, por lo tanto, habrá lugar a confirmar dicha condena.

Siendo ello así, a la conclusión que se llega es que el fallo de primer grado se habrá de confirmar en su integridad. En esta instancia no se hará condena en costas, dada la manera en cómo se resuelven los recursos.

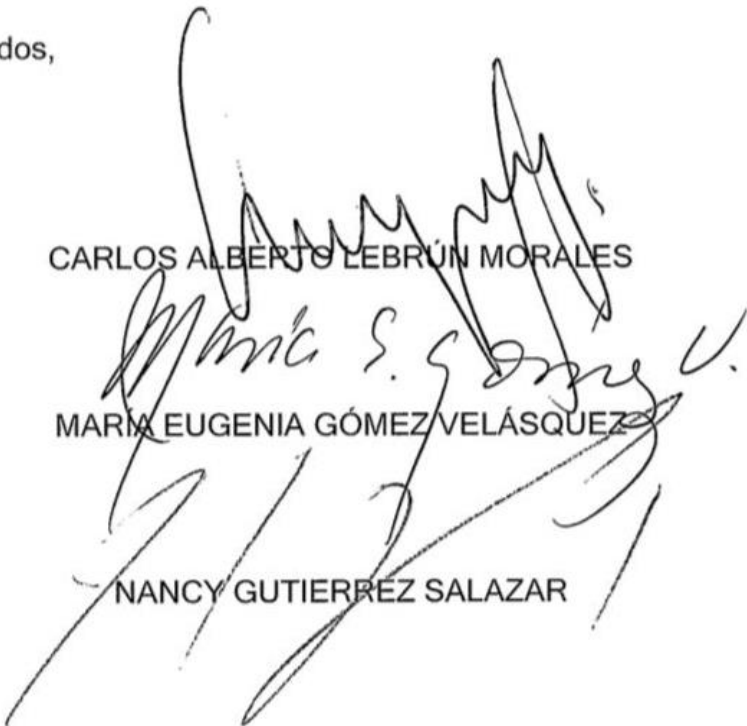
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación y consulta, incluido lo relativo a las costas, de fecha y procedencia conocidas.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 98 fijados el 8 de junio de 2021 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.